



# Asamblea General

Distr. general  
5 de agosto de 2022  
Español  
Original: inglés

---

## Septuagésimo séptimo período de sesiones

Tema 69 b) del programa provisional

**Promoción y protección de los derechos humanos:  
cuestiones de derechos humanos, incluidos otros medios de  
mejorar el goce efectivo de los derechos humanos y las  
libertades fundamentales**

## Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias

### Nota del Secretario General\*\*

El Secretario General tiene el honor de transmitir a la Asamblea General el informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, presentado de conformidad con la resolución [75/189](#) de la Asamblea General.

---

\* [A/77/150](#).

\*\* Este informe se presentó fuera del plazo establecido con el propósito de incluir la información más reciente.



## **Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz**

### *Resumen*

Con motivo del cuadragésimo aniversario del establecimiento del mandato sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, ofrece una reflexión desde una perspectiva histórica sobre el establecimiento del mandato y la posterior evolución de sus métodos de trabajo. El Relator Especial sigue los pasos del desarrollo de las normas y directrices internacionales elaboradas con la considerable contribución y apoyo de los diversos titulares del mandato. El informe también incluye un análisis de la cuestión de la pena de muerte desde el punto de vista de su compatibilidad con la prohibición absoluta de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como recomendaciones destinadas a velar por la protección del derecho a la vida, garantizado por los instrumentos internacionales de derechos humanos.

## I. Introducción

1. En el año 2022 se cumple el cuadragésimo aniversario de la creación del mandato sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el mandato temático más antiguo entre los procedimientos especiales<sup>1</sup>. En el presente informe, el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, reflexiona sobre los avances en los métodos de trabajo del mandato y sobre la evolución de las normas y directrices que se han elaborado con la participación de los titulares del mandato con el fin de promover y proteger el derecho a la vida y de establecer salvaguardias contra las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. El informe también incluye un análisis de la cuestión de la pena de muerte desde el punto de vista de su compatibilidad con la prohibición absoluta de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como recomendaciones destinadas a velar por la protección del derecho a la vida, garantizado por los instrumentos internacionales de derechos humanos.

2. El Relator Especial muestra su agradecimiento a los Estados, las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas que respondieron a su solicitud de aportaciones. El presente informe se basa en las respuestas recibidas.

## II. Actividades del Relator Especial

3. El presente informe abarca las principales actividades llevadas a cabo por el Relator Especial entre abril y julio de 2022. Las actividades realizadas entre abril de 2021 y marzo de 2022 se incluyen en el informe temático del Relator Especial presentado ante el Consejo de Derechos Humanos<sup>2</sup>.

### A. Comunicaciones

4. Durante el periodo examinado, el Relator Especial envió, de manera individual o junto con otros titulares de mandatos de procedimientos especiales, 47 comunicaciones a Estados y agentes no estatales, además de publicar 14 comunicados de prensa.

### B. Reuniones y otras actividades

5. En abril de 2022, con motivo de la inauguración del año académico 2022 en el Instituto Dr. Carlos Ybar de Chile, el Relator Especial impartió una clase magistral sobre medicina forense y derechos humanos, centrándose en el papel del mandato en la elaboración de las normas forenses. Ese mismo día, participó en otro acto organizado por la Universidad del Uruguay, en el que hizo una presentación sobre la función del mandato a la hora de abordar la cuestión de las muertes de personas detenidas.

6. El 3 de mayo, el Relator Especial dio una conferencia en la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, donde habló del papel de las ciencias forenses en la investigación de las violaciones de los derechos humanos.

<sup>1</sup> A lo largo de sus 40 años de historia, el mandato lo han desempeñado S. Amos Wako (1982-1992), Bacre Waly Ndiaye (1992-1998), Asma Jahangir (1998-2004), Philip Alston (2004-2010), Christof Heyns (2010-2016), Agnes Callamard (2016-2021) y el actual titular.

<sup>2</sup> [A/HRC/50/34](#).

7. También en mayo, el Relator Especial realizó una visita académica a Costa Rica por invitación del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Durante la visita, dio una conferencia sobre el mandato en la Universidad para la Paz y en la academia diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica. También mantuvo reuniones de alto nivel con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, así como con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, con objeto de deliberar sobre la cooperación para la promoción y la aplicación de normas de interés compartido, principalmente el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas, a nivel regional.

8. En junio, el Relator Especial participó en un diálogo de alto nivel sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, organizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al que asistieron representantes de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, mecanismos internacionales y Estados.

9. En el contexto del cuadragésimo aniversario del establecimiento del mandato, el Relator Especial participó en la decimocuarta reunión anual de la Red Iberoamericana de Instituciones de Medicina Legal y Ciencias Forenses, celebrada en Guayaquil (Ecuador) del 27 al 29 de junio. También en junio, asistió a la inauguración del primer Congreso Internacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, organizado por el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ecuador. En ambos eventos, dio presentaciones y conferencias sobre el Protocolo de Minnesota.

### III. Creación del mandato

10. La Asamblea General abordó de forma periódica la cuestión de la pena de muerte durante las décadas de 1950, 1960 y 1970. En 1968 aprobó por unanimidad la resolución 2393 (XXIII), en la cual se destacaba la importancia de las garantías procesales en torno a la pena de muerte. En 1971 fue más allá al afirmar, en el párrafo 3 de la resolución 2857 (XXVI), que, para garantizar plenamente el derecho a la vida, el objetivo principal que debía buscarse era reducir progresivamente el número de delitos por los que podía imponerse la pena capital, habida cuenta de la conveniencia de abolir dicha pena en todos los países.

11. Al mismo tiempo, al margen de las Naciones Unidas, las primeras organizaciones no gubernamentales internacionales de derechos humanos valoraban cómo responder a lo que parecía ser una tendencia creciente a la comisión de asesinatos políticos. Tras haber hecho campaña de forma tan eficaz sobre la cuestión de los presos políticos y la tortura, les inquietaba que los Gobiernos parecieran estar evitando el posible escrutinio de las detenciones de opositores políticos, optando en su lugar por hacerlos “desaparecer” y matarlos sin ningún proceso judicial. En este sentido cabe mencionar también la efectiva labor de promoción transnacional por parte de las víctimas y sus familiares, como por ejemplo las organizaciones Vicaría de la Solidaridad en Chile y las Abuelas de Plaza de Mayo en la Argentina.

12. En 1980, a la vez que la Comisión de Derechos Humanos creaba un grupo de trabajo para estudiar las desapariciones, la comunidad internacional también había empezado a examinar la cuestión de las ejecuciones sumarias. La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías tenía desde hacía mucho tiempo un tema del programa sobre “desapariciones y ejecuciones sumarias”, pero tanto la preferencia diplomática como la estrategia de la sociedad civil centraron los debates sustantivos en la pena de muerte (“ejecuciones sumarias o arbitrarias”) y los

asesinatos políticos (“ejecuciones extrajudiciales”) en el contexto del Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia, con sede en Viena, y el correspondiente Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, de carácter quinquenal. Fue en el sexto Congreso, celebrado en 1980, donde se lograron los primeros avances notables hacia el reconocimiento internacional de las ejecuciones extrajudiciales, cuando un grupo de países (Austria, Dinamarca, Finlandia, Noruega, los Países Bajos, Suecia y Venezuela, país anfitrión del Congreso) patrocinó una resolución sobre la cuestión, que fue aprobada con 74 votos a favor<sup>3</sup>.

13. En la resolución no se definía el término “ejecuciones extrajudiciales”, pero se condenaba “la práctica de asesinatos y ejecuciones de oponentes políticos o de presuntos delincuentes cometidos por fuerzas armadas, instituciones encargadas de la aplicación de la ley u otros organismos gubernamentales o grupos paramilitares políticos que actúan con el apoyo tácito o de otra índole de tales fuerzas u organismos”<sup>4</sup>.

14. Mientras tanto, en su período de sesiones de agosto y septiembre de 1981, el grupo de trabajo sobre las detenciones de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías comenzó a considerar la cuestión de las “ejecuciones arbitrarias o sumarias” y redactó una resolución en la que pedía que se examinara esta cuestión con carácter urgente<sup>5</sup>.

15. En su discurso de apertura del 38º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, celebrado en febrero de 1982, el Director de la División de Derechos Humanos recordó una cuestión que, en cualquier circunstancia, debe considerarse entre las más básicas y fundamentales de la agenda de los derechos humanos, a saber, la necesidad de poner fin a las violaciones deliberadas del derecho a la vida. Afirmó que, en relación con el derecho a la vida, la Comisión se dedicaba a “proteger a la persona humana y a evitar los asesinatos perpetrados deliberadamente por el poder organizado”. Hizo hincapié en la reciente resolución de la Asamblea General sobre las ejecuciones sumarias y arbitrarias y en la atención prestada a la cuestión por parte de la Subcomisión<sup>6</sup>. También se refirió explícitamente a la situación en Kampuchea Democrática y a las matanzas allí cometidas bajo el régimen de Pol Pot. Además, mencionó informes de violaciones en masa de los derechos humanos en Chile, El Salvador, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Irán (República Islámica del) y Uganda, así como en el África Meridional. También aludió al informe anual más reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el cual la Comisión, gracias a su visita pionera a la Argentina en 1978, había constatado un número alarmante de “ejecuciones sumarias, ilegales o extrajudiciales”, en la mayoría de los casos cometidas por las fuerzas de seguridad con total impunidad.

16. Durante los debates posteriores, varios Estados pidieron que se adoptaran medidas contra las ejecuciones sumarias y arbitrarias. Dinamarca presentó un proyecto de resolución que incluía referencias a la resolución de la Subcomisión en la que se llamaba la atención sobre el aumento de las ejecuciones por motivos políticos, para lo cual se requería atención urgente, así como a las resoluciones de la Asamblea General y al sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. El 11 de marzo de 1982, la Comisión de Derechos Humanos aprobó la resolución por la cual se solicitaba el nombramiento de un relator especial para examinar la cuestión de las ejecuciones sumarias o

<sup>3</sup> Siete países registraron su abstención: la Argentina, Chile, Egipto, Etiopía, Filipinas, Indonesia y el Uruguay.

<sup>4</sup> [A/CONF.87/14/Rev.1](#), resolución 5, párr. 1.

<sup>5</sup> [E/CN.4/1512](#).

<sup>6</sup> [E/CN.4/1982/SR.1](#), párr. 8.

arbitrarias<sup>7</sup>. En consecuencia, S. Amos Wako fue designado ese mismo año como primer titular del mandato.

#### IV. Alcance temático

17. Desde su primer informe, el Sr. Wako dejó claro que el derecho a la vida sería el punto de referencia normativo de las labores de su mandato<sup>8</sup>. Hizo hincapié en que la protección del derecho a la vida conllevaba la protección del individuo frente a los ataques injustificados del Estado y en que los Estados también tenían la obligación de proteger la vida frente a los ataques de los particulares<sup>9</sup>. Introdujo las definiciones de “ejecución sumaria”, definida como una privación arbitraria de la vida como resultado de una sentencia impuesta sin las debidas garantías procesales, según se establecen en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; “ejecución arbitraria”, definida como un homicidio perpetrado por orden de un gobierno o con su complicidad o tolerancia sin un proceso judicial o legal; y “ejecución extralegal”, definida como un homicidio cometido al margen del proceso judicial<sup>10</sup>. En 1992, diez años después de su creación, el mandato pasó a referirse a las “ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias” en la resolución 1992/72 de la Comisión de Derechos Humanos.

18. En su informe de 1993, el posterior titular del mandato, Bacre Waly Ndiaye, proporcionó un marco normativo para la aplicación del mandato, señalando que el Relator Especial debía ocuparse de todas las violaciones del derecho a la vida, según lo establecido en los instrumentos internacionales de derechos humanos<sup>11</sup>, e identificando los siguientes temas que debían tenerse en consideración: la cuestión de la pena de muerte; los casos de muerte durante la detención preventiva; las muertes debidas al uso de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; las violaciones del derecho a la vida durante los conflictos armados; las cuestiones relativas a la (no) devolución; los actos de genocidio; y los derechos de las víctimas<sup>12</sup>.

19. En 2002 la siguiente titular del mandato, Asma Jahangir, articuló el alcance del mandato con objeto de incluir las siguientes situaciones: a) el genocidio; b) las violaciones del derecho a la vida durante los conflictos armados; c) las muertes causadas por atentados u homicidios perpetrados por las fuerzas de seguridad del Estado o por fuerzas privadas que cooperan con el Estado o son toleradas por este; d) las muertes debidas al uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuando no se ajuste a los principios de necesidad y proporcionalidad; e) las muertes sobrevenidas durante la detención preventiva debido a la tortura, el abandono o el uso de la fuerza, o unas condiciones de detención que pongan en peligro la vida; f) las amenazas de muerte y el temor a ejecuciones extrajudiciales inminentes; g) la expulsión, la devolución o el retorno de personas a un país o un lugar donde sus vidas corran peligro y el cierre de las fronteras nacionales para impedir que solicitantes de asilo salgan de un país donde sus vidas estén en peligro; h) las muertes causadas por actos de omisión de las autoridades, o por su incapacidad para adoptar medidas preventivas; i) el incumplimiento de la obligación de investigar las supuestas violaciones del derecho a la vida y de proceder contra los presuntos responsables; j) el incumplimiento de la obligación de pagar una

<sup>7</sup> La resolución 1982/29 de la Comisión de Derechos Humanos fue aprobada por 33 votos contra 1 y 8 abstenciones. La resolución fue refrendada por el Consejo Económico y Social en su resolución 1982/35.

<sup>8</sup> E/CN.4/1983/16, párrs. 22 a 47.

<sup>9</sup> *Ibid.*, párr. 65.

<sup>10</sup> *Ibid.*, párr. 66.

<sup>11</sup> E/CN.4/1993/46, párr. 42.

<sup>12</sup> *Ibid.*, párrs. 49 a 68.

indemnización adecuada a las víctimas de violaciones del derecho a la vida; y k) las violaciones del derecho a la vida relacionadas con la pena de muerte<sup>13</sup>.

20. Otra importante contribución de la Sra. Jahangir fue la inclusión dentro del ámbito del mandato de la violencia de género, incluidos los asesinatos por honor, algo que más tarde desarrollaría otra titular del mandato, Agnes Callamard<sup>14</sup>. El actual titular del mandato tiene previsto mantener este enfoque con un informe sobre las investigaciones de los feminicidios.

21. Philip Alston enmarcó el mandato en los siguientes términos:

Aunque el título de mi mandato pueda parecer complejo, debe entenderse simplemente que incluye cualquier asesinato que viole el derecho internacional de los derechos humanos o el derecho humanitario. Esto puede incluir muertes ilícitas causadas por la policía, muertes producidas bajo custodia militar o civil, asesinatos de civiles en conflictos armados en violación del derecho humanitario, y patrones de asesinatos por parte de particulares que no son investigados y enjuiciados adecuadamente por las autoridades<sup>15</sup>.

22. Christof Heyns definió el derecho a la vida como el “núcleo normativo del mandato”, articulando lo que él describió como el principio de “proteger la vida”, es decir, que la privación de la vida no puede justificarse más que sobre la base de que sea necesaria para salvar vidas<sup>16</sup>.

## V. Desarrollo de puntos de referencia normativos

23. Cuando se estableció el mandato, ya existía un modesto mosaico de orientaciones normativas relativas a la protección del derecho a la vida, más allá de la articulación de dicho derecho en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y sus Protocolos. También existía el derecho indicativo, como las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, aprobadas en 1957 (y de nuevo en 1977), la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada por la Asamblea General en 1975, y, tal vez lo más inmediatamente útil para el mandato, el Código de Conducta para Funcionarios encargados de Hacer Cumplir la Ley, aprobado en 1979.

24. En todo caso, el primer decenio de existencia del mandato fue testigo de la adopción de los pilares fundamentales por los que se regirían sus labores hasta el día de hoy. Los titulares del mandato han seguido participando en la actualización de estas orientaciones normativas desde entonces.

### A. Salvaguardias relativas a la pena de muerte

25. En su primer informe, el Sr. Wako indicó que, dadas las consecuencias irreversibles de la violación del derecho a la vida, el derecho internacional había establecido salvaguardias de procedimiento rigurosas para garantizar que no se dictase una pena de muerte o se ejecutase a una persona a la ligera<sup>17</sup>. Expuso en detalle

<sup>13</sup> E/CN.4/2002/74, párr. 8. Para su uso posterior como taxonomía de las circunstancias en las que el titular del mandato suele actuar, véase, por ejemplo, E/CN.4/2005/7, párr. 8.

<sup>14</sup> A/HRC/35/23, párrs. 50 a 78.

<sup>15</sup> A/HRC/11/2/Add.5, párr. 3.

<sup>16</sup> A/71/372, párr. 22.

<sup>17</sup> E/CN.4/1983/16, párr. 22.

las salvaguardias establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en los convenios regionales de derechos humanos, especialmente en lo relativo a las normas sobre juicios imparciales<sup>18</sup>. Posteriormente, en su segundo informe, subrayó que los delitos por los que se podía imponer la pena de muerte eran los “más graves”, a la vez que expresaba su preocupación por el hecho de que, en cambio, se aplicara por “toda una serie de otros delitos que en otras situaciones podrían considerarse como relativamente menos graves”<sup>19</sup>.

26. Con respecto a la sección sobre la pena de muerte que se incluye en el presente informe, cabe señalar en particular que el Sr. Wako también incidió en que “durante todo el proceso conducente a la pena capital y en todos los aspectos del mismo, se aplicará la prohibición de torturas y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”<sup>20</sup>.

27. En esos dos informes, el Sr. Wako abordó todas las cuestiones tratadas en las salvaguardias que garantizan la protección de los derechos de los condenados a muerte. Al adoptar las salvaguardias, el Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia reconoció la importancia de la labor de la Comisión de Derechos Humanos y de los dos informes ya elaborados por el Sr. Wako<sup>21</sup>.

28. Una vez adoptadas las salvaguardias, el Sr. Wako acogió con beneplácito su contribución al desarrollo del concepto de ejecuciones sumarias o arbitrarias, señalando que serviría de criterio para determinar si una ejecución era de carácter sumario o arbitrario<sup>22</sup>.

## **B. Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley**

29. No existen registros históricos claros sobre el papel que desempeñó el Relator Especial en el proceso de elaboración de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que fueron finalmente aprobados en el octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana en agosto y septiembre de 1990.

30. El Sr. Wako incluyó los Principios Básicos como un anexo a su informe de 1991, con la recomendación de que los gobiernos “[revisasen] las leyes y reglamentos nacionales así como las prácticas de las autoridades judiciales” con miras a garantizar el cumplimiento efectivo de todas las normas en las que se sustenta el mandato, pero en particular de ese instrumento más reciente<sup>23</sup>. Al año siguiente, incluyó en su informe anual una sección sobre “muertes debidas al uso de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”<sup>24</sup>.

31. La aprobación de los Principios Básicos también cambió la forma en que el Sr. Wako abordó la cuestión del uso de la fuerza. Si bien hasta entonces se había basado en el artículo 3 del Código de Conducta para Funcionarios encargados de Hacer Cumplir la Ley y su comentario, donde se establecía que los funcionarios encargados

<sup>18</sup> *Ibid.*, párrs. 22 a) a i).

<sup>19</sup> E/CN.4/1984/29, párr. 39.

<sup>20</sup> E/CN.4/1983/16, párr. 23.

<sup>21</sup> E/1984/16, párr. 105.

<sup>22</sup> E/CN.4/1985/17, párr. 24. En su contribución por escrito, Advocates for Human Rights detalló cómo estas salvaguardias, junto con diversos informes posteriores del titular del mandato, cumplieron esta valiosa función.

<sup>23</sup> E/CN.4/1991/36, párr. 598 a).

<sup>24</sup> E/CN.4/1992/30, párr. 29.



de hacer cumplir la ley estaban autorizados a utilizar la fuerza solo cuando fuera estrictamente necesario y en la medida en que lo requiriera el desempeño de sus tareas, tras la adopción de los Principios Básicos pudo hacer una referencia más clara a la necesidad de proporcionalidad, citando los Principios Básicos 4, 5, 9 y 10, que, según señaló, “se basan en el principio fundamental de que la intensidad de la fuerza empleada debe ser proporcional al objetivo que se desea alcanzar”<sup>25</sup>.

### C. Principios y mejores prácticas para las investigaciones

32. Desde el inicio de su mandato, el Sr. Wako insistió en que la cuestión de las investigaciones sería fundamental para la labor del titular del mandato e hizo hincapié en la necesidad de establecer unas normas mínimas al respecto. Esto estaba en consonancia con la evolución de la práctica de los derechos humanos.

33. Durante la década de 1980, las ciencias forenses adquirieron una importancia cada vez mayor en la investigación de las violaciones de los derechos humanos, como demuestra en concreto la labor pionera de organizaciones no gubernamentales como Abuelas de la Plaza de Mayo y el Equipo Argentino de Antropología Forense<sup>26</sup>.

34. En su informe de 1986, el Sr. Wako subrayó que cualquier norma para la investigación de muertes sospechosas debía incluir la realización de una autopsia adecuada y la publicación de sus resultados. Además, sostenía que una muerte sobrevenida bajo cualquier tipo de custodia debería ser considerada en principio como una ejecución sumaria o arbitraria y que deberían realizarse inmediatamente las investigaciones adecuadas para confirmar o rebatir esa presunción<sup>27</sup>.

35. Ese mismo año, el Consejo Económico y Social aprobó la resolución 1986/10 en la que pedía al Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia que examinara la cuestión de las ejecuciones arbitrarias durante su décimo período de sesiones “a fin de elaborar principios para la eficaz prevención e investigación de tales prácticas”. Paralelamente, y sobre la base de la labor del Relator Especial, la Comisión de Derechos Humanos recomendó en su resolución 1987/57 que las organizaciones internacionales hicieran “un esfuerzo concertado para elaborar un proyecto de normas internacionales destinadas a asegurar que se llevan a cabo las investigaciones adecuadas por parte de las autoridades competentes en todos los casos de muerte sospechosa, con inclusión de las debidas disposiciones para la realización de una autopsia”.

36. El mismo proceso con sede en Viena que había dirigido los primeros debates en torno a la creación del mandato centró posteriormente su atención en cuestiones normativas acerca de los Principios relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias. El Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia aprobó los Principios, tal y como había solicitado el Consejo Económico y Social, durante su período de sesiones de 1988, y posteriormente fueron adoptados por el propio Consejo en su resolución 1989/65 y por la Asamblea General, al año siguiente.

<sup>25</sup> Compárese el resumen de la comunicación con la India en [E/CN.4/1991/36](#), párr. 208, con el resumen de la comunicación con Burundi en [E/CN.4/1992/30](#), párr. 86.

<sup>26</sup> Véanse Luis Fondebrider, “Reflexiones sobre la documentación científica relativa a las violaciones de los derechos humanos”, *Revista Internacional de la Cruz Roja*, núm. 848 (2002); Robert Kirschner y Kari Hannibal, “The application of the forensic sciences to human rights investigations”, *Medicine and Law*, vol. 13 (1994); y Roxana Ferllini, ed., *Forensic Archaeology and Human Rights Violations* (Springfield, Illinois, Charles C. Thomas Publisher, 2007).

<sup>27</sup> [E/CN.4/1986/21](#), párr. 209.

37. En su informe posterior, a la vez que lo celebraba como “un hito de su mandato”, el Sr. Wako señaló que, dado que los Principios reflejaban con suficiente detalle las ideas y opiniones del Relator Especial, podría remitirse a ellos sin reserva alguna en su examen de los supuestos casos de ejecuciones sumarias o arbitrarias. En lo que se convertiría en un tema recurrente del mandato –que la falta de investigación de una posible violación del derecho a la vida equivalía en sí misma a una violación del derecho–, añadió que toda práctica gubernamental que no se ajustara a las normas establecidas en los Principios podría considerarse como un indicio de responsabilidad gubernamental, incluso aunque no se pudiera probar que ningún funcionario estuviera directamente implicado en las ejecuciones sumarias o arbitrarias<sup>28</sup>.

38. Mientras tanto, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, coordinadas por el Comité Internacional de Derechos Humanos de los Abogados en Minnesota, convocó un proceso paralelo con el fin de elaborar un manual o protocolo para orientar la aplicación de los Principios bajo la dirección del Relator Especial.

39. En mayo de 1990, el Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia tomó nota de la aprobación de los Principios e instó a los Estados a que los aplicaran de manera efectiva. Finalmente, en mayo de 1991, la Subdivisión de Prevención del Delito y Justicia Penal del Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios (precursor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)) publicó el Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, que rápidamente se convirtió en el patrón de referencia universal para las investigaciones forenses de las muertes potencialmente ilícitas, y que actualmente se conoce como el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas.

40. El Sr. Ndiaye celebró que se ultimara el Manual como “un documento de suma importancia para garantizar el derecho a la vida” e instó a todos los Gobiernos a que incorporaran los procedimientos en su legislación y práctica nacionales, así como en los programas de formación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley<sup>29</sup>.

41. Desde la adopción de estas normas, los titulares del mandato han seguido brindando orientaciones de forma periódica sobre la realización de las investigaciones. Por ejemplo, en 2010, el Sr. Alston publicó un informe sobre los órganos de supervisión policial, en el que destacaba que, a fin de poder desempeñar su función esencial de garantizar la rendición de cuentas, los mecanismos de supervisión, tanto internos como externos, deben contar con las competencias y los recursos necesarios<sup>30</sup>.

42. Entre 2014 y 2016, siendo consciente de la necesidad de recopilar los 25 años de avances de las normas jurídicas y las buenas prácticas forenses que figuran en ellas, el Sr. Heyns convocó un proceso de expertos para elaborar una versión actualizada y revisada del Manual, que fue publicada por las Naciones Unidas como Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas<sup>31</sup>. Esta labor fue llevada a cabo por dos grupos de expertos en redacción (uno de ellos presidido por el actual titular del mandato) y revisada por un amplio grupo consultivo

<sup>28</sup> E/CN.4/1990/22, párr. 463.

<sup>29</sup> E/CN.4/1993/46, párr. 66.

<sup>30</sup> A/HRC/14/24/Add.8.

<sup>31</sup> Este proceso, en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), puso en práctica las recomendaciones que figuran en las resoluciones 1998/36, 2000/32, 2003/33 y 2005/26 de la Comisión de Derechos Humanos.

(que incluía a los antiguos titulares del mandato, el Sr. Ndiaye, la Sra. Jahangir y el Sr. Alston)<sup>32</sup>.

43. En su último informe al Consejo de Derechos Humanos, el actual Relator Especial analizó cómo el Protocolo de Minnesota, en su forma revisada, se había visto reflejado en la práctica médico-jurídica en todo el mundo. El Relator Especial indicó que la capacidad de los Estados para investigar todas las muertes potencialmente ilícitas, tal y como exige el derecho internacional, se veía obstaculizada con demasiada frecuencia, e instó a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos por mejorar los sistemas de investigación médico-jurídica de las muertes en todo el mundo<sup>33</sup>.

44. En el Protocolo de Bournemouth sobre protección e investigación de fosas comunes<sup>34</sup> se han abordado parcialmente las repercusiones del Protocolo de Minnesota, en su forma revisada, para la protección de los muertos y la investigación de los lugares de enterramiento, una cuestión en la que hizo hincapié la Sra. Callamard en su informe a la Asamblea General en 2020<sup>35</sup>. El actual Relator Especial tiene previsto valerse de esta labor para seguir elaborando directrices, desde la perspectiva del mandato, sobre la protección de los cadáveres y los restos humanos de las víctimas de muertes ilícitas<sup>36</sup>.

45. Otro proceso que se inició en la misma época fue la elaboración de las Orientaciones de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos sobre el Empleo de Armas Menos Letales en el Mantenimiento del Orden. Este documento se publicó en respuesta al creciente uso de armas “menos letales” en la vigilancia policial de las manifestaciones (como se destaca, por ejemplo, en el informe conjunto que el Relator Especial se había encargado de redactar entre 2014 y 2016 sobre la gestión de las manifestaciones) y a una preocupación más amplia por la carga de lesiones (incluidas las lesiones mortales) derivadas del uso de dichas armas en otros contextos. Además, tras constatar el hecho de que los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley fomentaban el desarrollo y la adquisición de este tipo de armas por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sin ofrecer una orientación normativa clara sobre su uso, el Sr. Heyns recomendó al Consejo de Derechos Humanos que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) convocara un grupo de expertos para elaborar dicho documento. Con la participación continua tanto del Sr. Heyns como de su sucesora, la Sra. Callamard, el ACNUDH colaboró con la Academia de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de Ginebra para convocar un grupo de redacción de más de 50 expertos en cumplimiento de la ley, legislación en materia de armas, formación policial y derechos humanos, que mantuvieron consultas entre 2017 y 2019.

46. Las orientaciones formuladas y finalmente publicadas por el ACNUDH se idearon sobre la base de las normas existentes, como los Principios Básicos. En ellas se aclaran las salvaguardias necesarias que deben rodear cualquier adquisición, prueba o uso de armas menos letales y se subraya la importancia de la formación específica sobre su uso; también se describen los factores de riesgo concretos asociados a los diferentes tipos de armas, definiendo las circunstancias de uso potencialmente lícito y aportando ejemplos de armas o aplicaciones que serían claramente contrarias a derecho.

<sup>32</sup> Para un análisis completo del proceso de revisión del Protocolo de Minnesota, véase Christof Heyns y otros, “Investigating potentially unlawful death under international law: the 2016 Minnesota Protocol”, *The International Lawyer*, vol. 52, núm. 1 (2019).

<sup>33</sup> [A/HRC/50/34](#).

<sup>34</sup> Melanie Klinkner y Ellie Smith, *The Bournemouth Protocol on Mass Grave Protection and Investigation* (Bournemouth (Reino Unido), Universidad de Bournemouth, 2020).

<sup>35</sup> [A/75/384](#).

<sup>36</sup> [A/76/264](#), párrs. 48 a 53.

47. Estos avances normativos más recientes han incluido una enorme diversidad de buenas prácticas comparativas, que permiten ilustrar con crudeza la magnitud de la brecha de implementación entre las normas internacionales existentes y los niveles actuales de la práctica nacional en numerosos contextos. Una función fundamental – aunque a menudo infrautilizada – del titular del mandato en materia de creación de capacidad es prestar asistencia técnica a los Estados a fin de ayudarlos a superar esta brecha de implementación. El actual Relator Especial reitera que está dispuesto a facilitar apoyo y asistencia a los Estados y a otras instancias en sus esfuerzos por responder debidamente a las inquietudes en materia de derechos humanos, reforzando al mismo tiempo la protección de los derechos humanos a nivel nacional.

48. Estos acontecimientos también ejemplifican el valor de la colaboración que los titulares del mandato han forjado con el mundo académico a lo largo de los años para llevar a cabo investigaciones científicas y académicas insustituibles, entre las que se incluyen las más recientes con la Universidad de Monash y con la Academia de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de Ginebra.

## **VI. Contribuciones prácticas destacadas del mandato**

### **A. Croacia**

49. En respuesta a la grave situación de los derechos humanos en la ex-Yugoslavia, la Comisión de Derechos Humanos adoptó una resolución en la que solicitaba al Sr. Ndiaye, junto con varios otros titulares de mandatos de procedimientos especiales, que visitaran una serie de países de la región a finales de 1992, en lo que se conoció como la Comisión Mazowiecki.

50. Estas visitas se llevaron a cabo poco después de la finalización del Protocolo de Minnesota, lo cual resultó especialmente importante puesto que el equipo que acompañaba al Relator Especial incluía a investigadores forenses y expertos médico-jurídicos (entre ellos el actual Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias) que pudieron probar el Protocolo sobre el terreno durante sus investigaciones<sup>37</sup>. Sus conclusiones contribuyeron posteriormente a la decisión de la comunidad internacional de crear el Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia.

51. El Sr. Ndiaye, en su propio informe, puso de relieve el papel que podían jugar las ejecuciones extrajudiciales de cara a aplicar una política de “limpieza étnica” y alertó de forma temprana sobre el riesgo de que se produjeran este tipo de asesinatos en otros lugares de la región.

### **B. Rwanda**

52. El Sr. Ndiaye realizó una visita a Rwanda del 8 al 17 de abril de 1993. En su informe, dio la voz de alarma sobre el presunto asesinato de un gran número de civiles, entre ellos opositores políticos; sobre el papel de los medios de comunicación locales a la hora de instigar la violencia; y sobre el riesgo de que se produjeran efectos indirectos en Burundi. Desafortunadamente, la comunidad internacional hizo caso omiso de la mayor parte de sus advertencias y recomendaciones.

<sup>37</sup> Morris Tidball-Binz, “Forensic investigation of alleged war crime near Vukovar”, *The Lancet*, vol. 341, núm. 6 (marzo de 1993).

## C. Sri Lanka

53. El Sr. Alston visitó Sri Lanka en 2005 e informó sobre las violaciones y los abusos de las normas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidos por ambas partes del conflicto<sup>38</sup>.

54. Tras el fin del conflicto, salieron a la luz unas grabaciones de vídeo que mostraban presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por efectivos militares de Sri Lanka y que fueron emitidas por una cadena británica, Channel 4. Tras enviar una comunicación oficial acerca de las imágenes, que el Gobierno de Sri Lanka rechazó por considerarlas falsas, el Sr. Alston inició su propia investigación<sup>39</sup>, que confirmó que las imágenes correspondían a matanzas reales<sup>40</sup>.

55. En noviembre de 2010, después de que el Sr. Heyns asumiera el mandato, la cadena Channel 4 hizo públicos otros cinco minutos de imágenes, esta vez mostrando los rostros de algunos de los oficiales implicados en las ejecuciones. A raíz de su investigación posterior, el Sr. Heyns llegó a la conclusión de que las ejecuciones mostradas constituían crímenes de guerra perpetrados por el ejército de Sri Lanka<sup>41</sup>.

## D. Investigaciones *ad hoc* más recientes sobre incidentes concretos

56. En los últimos años, los titulares del mandato han emprendido varias investigaciones de alto nivel sobre casos concretos de muertes ilícitas.

57. En enero de 2019, la Sra. Callamard llevó a cabo una investigación sobre derechos humanos en relación con el asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi, con la ayuda de expertos forenses y en materia de derechos humanos.

58. La investigación constató la existencia de pruebas fidedignas que justificaban una investigación más a fondo de la responsabilidad individual de los funcionarios de alto nivel de la Arabia Saudita, señalando que uno de los propósitos de la búsqueda de justicia y de la rendición de cuentas en estos casos era identificar a las personas que, en el contexto de la comisión de una violación, se habían excedido de las atribuciones inherentes a sus puestos de autoridad o bien no habían logrado cumplirlas. Asimismo, también planteó dudas sobre la falta de protección por parte del Gobierno de Turquía, incluida la realización de una investigación efectiva y minuciosa<sup>42</sup>.

59. Al año siguiente, en su informe al Consejo de Derechos Humanos, la Sra. Callamard abordó el caso del asesinato de un general iraní, Qasem Soleimani, a la luz del derecho internacional pertinente, en particular en relación con el uso de drones armados<sup>43</sup>.

<sup>38</sup> [E/CN.4/2006/53/Add.5](#).

<sup>39</sup> Para un análisis general de las investigaciones sobre Sri Lanka llevadas a cabo tanto por el Sr. Alston como por el Sr. Heyns, véase Thomas Probert, “The role of the UN Human Rights Council special procedures in protecting the right to life in armed conflicts” en *By All Means Necessary: Protecting Civilians and Preventing Mass Atrocities in Africa*, Dan Kuwali y Frans Viljoen, eds. (Pretoria, Pretoria University Law Press, 2017).

<sup>40</sup> Philip Alston, “Technical note prepared by the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Mr. Philip Alston, in relation to the authenticity of the ‘Channel 4 videotape’”, documento elaborado para el ACNUDH, enero de 2010.

<sup>41</sup> [A/HRC/17/28/Add.1](#), apéndice.

<sup>42</sup> [A/HRC/41/36](#), párr. 8.

<sup>43</sup> [A/HRC/44/38](#), párr. 64.

## E. Colaboración con los órganos de las Naciones Unidas y otros mecanismos de derechos humanos

60. Además de sus actividades ordinarias, en ocasiones la Comisión de Derechos Humanos o el Consejo de Derechos Humanos han pedido a los titulares del mandato que participen en investigaciones *ad hoc*. La Comisión Mazowiecki, mencionada anteriormente, fue un primer ejemplo de ello, al igual que la participación de la Sra. Jahangir en una misión conjunta a Timor Oriental en 1999 y la designación del Sr. Heyns para la investigación independiente sobre Burundi realizada en virtud de la resolución [S-24/1](#) del Consejo de Derechos Humanos, en 2016.

61. La misión a Timor Oriental se llevó a cabo de conformidad con una resolución de un período extraordinario de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos (el cuarto período extraordinario de sesiones de este tipo en su historia), celebrado a finales de septiembre de 1999, en el que la Comisión, entre otras cosas, había solicitado que diversos titulares de mandatos realizaran visitas al país<sup>44</sup>. Se hicieron preparativos para que la Relatora Especial realizara una visita conjunta con el Relator Especial sobre la cuestión de la tortura y la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, a principios de noviembre<sup>45</sup>. Durante la visita, los Relatores Especiales se reunieron con víctimas y testigos de horrendos actos violentos, resaltaron la necesidad de realizar investigaciones eficaces e hicieron hincapié en que, si no se producían avances notables en los meses siguientes, el Consejo de Seguridad debería valorar el establecimiento de nuevos mecanismos de investigación, incluida la posible creación de una corte penal internacional<sup>46</sup>.

62. La investigación independiente sobre Burundi realizada en virtud de la resolución [S-24/1](#) del Consejo de Derechos Humanos recibió igualmente su mandato en un período extraordinario de sesiones del Consejo, en el que se solicitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que organizara, con la mayor celeridad posible, una misión con expertos independientes para llevar a cabo una investigación, entablar relaciones con las autoridades de Burundi y velar por la complementariedad y la coordinación de los esfuerzos con otras iniciativas de las Naciones Unidas y la Unión Africana. Se designaron dos Relatores Especiales (el Sr. Heyns y el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición), junto con una miembro de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Los expertos independientes constataron la existencia de abundantes pruebas de graves violaciones y abusos de los derechos humanos<sup>47</sup> y dieron la voz de alarma a la comunidad internacional sobre la consiguiente amenaza potencial para la paz y la seguridad en la región.

63. En al menos dos ocasiones, los Relatores Especiales colaboraron con el Consejo de Seguridad sobre la situación de los derechos humanos en países concretos. La Sra. Jahangir informó al Consejo sobre la situación en el Afganistán en noviembre de 2002 y, más recientemente, la Sra. Callamard informó al Consejo sobre la situación en el Iraq en febrero de 2018.

64. Los titulares del mandato también han tenido la oportunidad de colaborar con otros órganos de las Naciones Unidas, como ocurrió cuando el Sr. Heyns informó a los Estados partes en la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que Puedan Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados, en mayo de 2014, sobre cuestiones relacionadas con los sistemas de armas autónomos letales.

<sup>44</sup> Resolución 1999/S-4/1 de la Comisión de Derechos Humanos.

<sup>45</sup> [A/54/660](#).

<sup>46</sup> *Ibid.*, párr. 74.

<sup>47</sup> [A/HRC/33/37](#).

65. Los titulares del mandato también entablaron una relación de trabajo con la UNODC en Viena. Como se ha detallado anteriormente, el Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal (anteriormente, Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente) fue fundamental en el proceso que condujo a la creación del mandato y en el desarrollo de algunos de sus instrumentos básicos. En años más recientes, el Relator Especial ha colaborado con la UNODC en la revisión del Protocolo de Minnesota y en la elaboración de las Orientaciones de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos sobre el Empleo de Armas Menos Letales en el Mantenimiento del Orden. El Relator Especial también contribuyó al *Estudio mundial sobre el homicidio* publicado por la UNODC y recibió valiosas aportaciones de la UNODC para la preparación de su último informe al Consejo de Derechos Humanos<sup>48</sup>.

66. A lo largo del último decenio, los titulares del mandato se han esforzado por colaborar de forma productiva con los mecanismos regionales de derechos humanos. El Sr. Heyns, por ejemplo, fue uno de los redactores de la hoja de ruta de Addis Abeba, destinada a reforzar la colaboración y las sinergias entre los titulares de mandatos de procedimientos especiales y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos<sup>49</sup>. En concreto, colaboró estrechamente con el mecanismo análogo de la Comisión Africana, en particular durante la adopción de su observación general núm. 3 sobre la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos: el derecho a la vida (artículo 4), que se ha convertido en un importante punto de referencia normativo en África y fuera de ella.

67. También han tratado de colaborar con la Comisión Intergubernamental de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental sobre los Derechos Humanos, un órgano consultivo de la Asociación, especialmente en cuestiones relacionadas con la pena de muerte<sup>50</sup>.

68. Más recientemente, el Relator Especial ha trabajado para forjar relaciones técnicas de trabajo más sólidas con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular para la promoción y aplicación de las normas elaboradas por los titulares del mandato, como el Protocolo de Minnesota.

## VII. Imposición de la pena de muerte y sus efectos

69. En 2012 el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, sostuvo que era menester adoptar un nuevo enfoque, puesto que había pruebas manifiestas de que la norma estaba en evolución en cuanto a encuadrar el debate sobre la legalidad de la pena de muerte en el marco de los conceptos fundamentales de dignidad humana y prohibición de la tortura, de tal forma que se estaba convirtiendo en una norma del derecho consuetudinario, si es que no lo había hecho ya<sup>51</sup>.

70. Diez años después, en el presente informe, el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias vuelve a examinar las prácticas de la pena de muerte bajo el prisma de la tortura. También subraya que la repercusión de

<sup>48</sup> A/HRC/50/34.

<sup>49</sup> Véase ACNUDH, “Dialogue between special procedures mandate-holders of the UN Human Rights Council and the African Commission on Human and Peoples’ Rights”, disponible en [www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/SP/SP\\_UNHRC\\_ACHPRRoad\\_Map.pdf](http://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/SP/SP_UNHRC_ACHPRRoad_Map.pdf).

<sup>50</sup> Por ejemplo, en el diálogo sobre derechos humanos organizado por la Comisión Intergubernamental en Yakarta en 2014, del cual surgió la idea de un estudio temático. Véase A/69/265, párr. 52.

<sup>51</sup> A/67/279, párr. 74.



la pena de muerte va más allá de las personas condenadas a muerte. Por consiguiente, amplía el análisis a las familias, que a menudo son ignoradas y cargan de forma invisible con el dolor y el daño provocados por la pena capital.

71. Al preparar el presente informe, el Relator Especial solicitó contribuciones de los Estados Miembros, las organizaciones internacionales y regionales, las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones no gubernamentales y las comunidades y otras partes interesadas<sup>52</sup>. Muestra su agradecimiento a todos los que respondieron<sup>53</sup>.

## **A. Condiciones del corredor de la muerte y métodos de ejecución<sup>54</sup>**

### **1. La angustia de esperar la ejecución**

72. Los especialistas han argumentado que la tortura psicológica es una característica inherente a la pena de muerte. La pena capital provoca que el individuo condenado a muerte prevea un daño físico durante un período considerable de tiempo, y que se sienta indefenso para evitar ese daño, elementos ambos que son esenciales en la tortura psicológica<sup>55</sup>. De hecho, la anticipación de la ejecución por parte de estas personas ha dado lugar, en algunos casos, a conductas autolesivas, suicidios y otros problemas de salud, entre ellos enfermedades coronarias y accidentes cerebrovasculares<sup>56</sup>. Si bien la angustia de esperar la ejecución resulta innegable de por sí, las diferentes prácticas de cada país dan lugar a dimensiones únicas de dicha angustia. En algunos países, a los condenados a muerte se les notifica su ejecución con apenas unas horas de antelación; en otros, los individuos pueden enfrentarse a ejecuciones inminentes en múltiples ocasiones, ya que la familia de la víctima tiene la facultad de conceder un indulto o de reabrir las negociaciones sobre indemnizaciones (“dinero de sangre”) en cualquier momento<sup>57</sup>.

### **2. Las duras condiciones de los condenados a muerte**

73. Las personas condenadas esperan su ejecución en condiciones que pueden ser deshumanizadoras, y determinadas condiciones del corredor de la muerte, como el aislamiento, pueden llegar a constituir tortura, en función de las circunstancias<sup>58</sup>. En

<sup>52</sup> El presente informe se ha redactado con el apoyo de Eleos Justice, una colaboración entre Capital Punishment and Justice Project y la Facultad de Derecho de la Universidad de Monash (Australia).

<sup>53</sup> En total se recibieron 27 comunicaciones. Se pueden consultar en <https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/2022/call-input-imposition-death-penalty-and-its-impact>.

<sup>54</sup> El presente informe se centra en las consecuencias posteriores a la sentencia de pena de muerte. Si bien escapa al alcance de este informe, la tortura puede llevarse a cabo antes de que un individuo reciba una sentencia de muerte; se han presentado numerosas comunicaciones relativas al trato que se da a las personas acusadas de un delito castigado con la pena capital, incluida la falta de acceso a la representación jurídica y el uso de la tortura y los malos tratos para obtener confesiones forzadas.

<sup>55</sup> John D. Bessler, “Torture and trauma: why the death penalty is wrong and should be strictly prohibited by American and international law”, *Washburn Law Journal*, vol. 58 (2019).

<sup>56</sup> Comunicación de Harm Reduction International, párr. c) iii).

<sup>57</sup> Comunicación conjunta de CrimeInfo y Eleos Justice, secc. 4; comunicación del Centro Abdorrahman Boroumand de Derechos Humanos del Irán, pág. 1.

<sup>58</sup> El Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ha definido la reclusión en régimen de aislamiento como “el aislamiento físico y social de personas que permanecen encerradas en sus celdas entre 22 y 24 horas al día”. El régimen de aislamiento prolongado se refiere a “todo período de aislamiento que supere los 15 días”, porque en ese momento “algunos de los efectos psicológicos nocivos del aislamiento pueden ser irreversibles”. Véase A/66/268, párr. 26.



1999, por ejemplo, el Comité contra la Tortura determinó que la privación sensorial y la prohibición casi absoluta de comunicarse impuesta a algunos detenidos en un centro de detención de máxima seguridad provocaba sufrimientos continuos e injustificados que constituían tortura<sup>59</sup>. Muchas de las comunicaciones recibidas en respuesta a la solicitud de aportaciones documentaban que los condenados a muerte permanecían recluidos en régimen de aislamiento entre 21 y 23 horas al día y, en algunos casos, con una iluminación mínima o nula y un acceso limitado al aire fresco<sup>60</sup>.

74. El hacinamiento es un problema habitual en los centros de detención de todo el mundo, que a menudo agrava otros problemas que afectan a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, entre ellas los condenados a muerte. Entre los ejemplos cabe incluir: la detención en una celda de dos por tres metros, compartida por hasta 10 presos durante 22 horas al día, mientras que las horas restantes las pasan caminando esposados por la prisión; la falta de aseos en las celdas y la denegación de asistencia médica, que provoca que se propaguen enfermedades infecciosas; y el hacinamiento, que conlleva unas medidas de seguridad deficientes, como demuestra la continua adquisición de armas blancas en los centros penitenciarios<sup>61</sup>. Una de las comunicaciones también incluía un informe sobre el uso de grilletes en las manos y los pies de las personas condenadas a muerte las 24 horas del día<sup>62</sup>. La exposición a largo plazo a estas condiciones de los condenados a muerte constituye un trato cruel, inhumano y degradante.

75. También son preocupantes las repercusiones sobre la salud mental de los condenados a muerte, que a menudo se ven agravadas por la falta de atención y servicios de salud mental. Un estudio sobre las consecuencias psicológicas del corredor de la muerte constató que la mayoría de los entrevistados padecían al menos una enfermedad mental, que podía atribuirse a las condiciones del encarcelamiento en el corredor de la muerte<sup>63</sup>. Del mismo modo, otro estudio descubrió que un número considerable de prisioneros condenados a muerte declaraban tener sentimientos de ansiedad, depresión y tristeza; algunos informaron de autolesiones e intentos de suicidio<sup>64</sup>.

### 3. El fenómeno del “corredor de la muerte”: tiempo de permanencia en el corredor de la muerte

76. El “fenómeno del corredor de la muerte” —la perturbación emocional que sufren los presos condenados a muerte— ha sido reconocido por el Comité de Derechos Humanos y otros organismos a nivel internacional, regional y nacional. En función de las circunstancias, entre ellas el tiempo de permanencia en el corredor de la muerte, esto puede constituir un caso de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes<sup>65</sup>. Este concepto se incorporó en el vocabulario general sobre los derechos humanos con la sentencia de 1989 del Tribunal Europeo de Derechos

<sup>59</sup> A/56/44, párr. 186.

<sup>60</sup> Comunicación conjunta de Anti-Death Penalty Asia Network, Capital Punishment Justice Project y Eleos Justice, párr. 1.1; comunicación de Harm Reduction International, párr. c) i); comunicación conjunta de CrimeInfo y Eleos Justice, secc. 1; comunicación de Odhikar, pág. 3; y comunicación de Texas after Violence Project, párr. 2.

<sup>61</sup> Comunicación de Harm Reduction International, párr. c) ii); y comunicación de Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, párr. 2.

<sup>62</sup> Comunicación de The Rights Practice, pág. 2.

<sup>63</sup> Project 39A, *Deathworthy: A Mental Health Perspective of the Death Penalty* (Delhi, National Law University, 2021).

<sup>64</sup> Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka, “Prison study by the Human Rights Commission of Sri Lanka” (2020).

<sup>65</sup> A/HRC/36/27, párr. 3.

Humanos en el asunto *Soering c. Reino Unido*<sup>66</sup>. El Tribunal sostuvo que, teniendo en consideración el período de tiempo que los reclusos pasan por término medio en el corredor de la muerte (de seis a ocho años), según la práctica habitual en el estado de Virginia de los Estados Unidos de América, y las condiciones extremas de dicho régimen de detención, incluida la angustia siempre presente y creciente que conlleva esperar la ejecución de la pena de muerte, así como las circunstancias personales del demandante, especialmente su edad y su estado mental en el momento del delito, la extradición del demandante a los Estados Unidos lo expondría a un riesgo real de ser sometido a tratos que superarían el umbral fijado en el artículo 3 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

77. En 1993 el Comité Judicial del Consejo Privado del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte adoptó como criterio que la duración de la reclusión era el único factor para determinar si existe una pena cruel o inhumana. En la causa *Pratt and Morgan v. Jamaica*, el Consejo Privado creó el concepto de presunción de que una permanencia de más de cinco años en el pabellón de los condenados a muerte es el criterio para constatar el fenómeno del corredor de la muerte. A su juicio, los procedimientos de apelación en el país insumirían aproximadamente dos años y una apelación a un organismo internacional insumiría aproximadamente 18 meses. Al sumar ambos lapsos y agregar otro apropiado para dar lugar a demoras razonables, se llegaba a un lapso total de cinco años<sup>67</sup>. Sobre la base de esa decisión, algunos estudiosos han argumentado que el retraso en la ejecución no es suficiente por sí solo para concluir que se trata de un caso del fenómeno del corredor de la muerte<sup>68</sup>. Las comunicaciones recibidas por el Relator Especial describían retrasos en la ejecución superiores a los cinco años estipulados en la causa *Pratt and Morgan v. Jamaica*; el más prolongado fue un promedio de 22 años<sup>69</sup>.

78. En todo caso, según el Sr. Méndez, el retraso prolongado es solo una de las causas del fenómeno del corredor de la muerte. El enfoque mencionado entraña el riesgo de enviar a los Estados partes el mensaje de que deben ejecutar las sentencias de muerte tan rápidamente como sea posible después de que sean dictadas. Sin embargo, la angustia extrema que padecen las personas que están a la espera de una ejecución, inevitablemente marcada por el dolor y el sufrimiento, no puede contrarrestarse con un sistema de justicia rápido, el cual, además, podría conllevar el riesgo de la falta de garantías procesales adecuadas para evitar la ejecución de inocentes<sup>70</sup>.

#### 4. Los métodos de ejecución

79. El Comité de Derechos Humanos, en su observación general núm. 36 (2018) sobre el derecho a la vida, aclaró que los siguientes métodos de ejecución contravenían la prohibición de la tortura o los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que figura en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: la lapidación; la inyección de sustancias letales no ensayadas; las cámaras de gas; la incineración y el enterramiento en vida; y las ejecuciones públicas, así como

<sup>66</sup> William A. Schabas, *The Death Penalty as Cruel Treatment and Torture: Capital Punishment Challenged in the World's Courts* (Boston, Northeastern University Press, 1996), pág. 115.

<sup>67</sup> Véase A/67/279, párr. 46.

<sup>68</sup> Por ejemplo, Caycie D. Bradford, "Waiting to die, dying to live: an account of the death row phenomenon from a legal viewpoint", *Interdisciplinary Journal of Human Rights Law*, vol. 77, núm. 84 (2010).

<sup>69</sup> Comunicación de Texas after Violence Project, párr. 1; comunicación conjunta de CrimeInfo y Eleos Justice, párr. 1; y comunicación de Odhikar, pág. 4.

<sup>70</sup> A/67/279.

“otros métodos de ejecución dolorosos o humillantes”<sup>71</sup>. A nivel regional, en determinados casos, se consideró que los siguientes métodos de ejecución constituían tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes: la asfixia por gas, puesto que la asfixia mediante gas cianuro puede durar más de 10 minutos<sup>72</sup>; la lapidación<sup>73</sup>; el ahorcamiento<sup>74</sup>; el fusilamiento<sup>75</sup>; la decapitación; y la inyección letal.

80. La inyección letal ha provocado el mayor porcentaje de ejecuciones fallidas<sup>76</sup>. Se ha denunciado que provoca un dolor insoportable y un sufrimiento prolongado, que podría equivaler a tortura<sup>77</sup>. En las autopsias de las personas ejecutadas mediante inyección letal se encontraron indicios de edema pulmonar en la mayoría de los casos. Esto indica que los ejecutados experimentaron dolor físico y emocional, como si se estuvieran ahogando o asfixiando, y que sin duda sintieron pánico. Un tribunal federal de distrito de los Estados Unidos dictaminó en 2018 que el edema pulmonar, tal y como se mostraba en tales autopsias, alcanzaba el estándar fijado por el Tribunal Supremo para identificar las penas crueles e inusuales, equiparando la inyección letal con la táctica de tortura conocida como “ahogamiento simulado”<sup>78</sup>.

## 5. Repercusión de la pena de muerte para las familias

81. Las familias de las personas condenadas a muerte suelen cargar de forma invisible con el dolor y el daño provocados por la pena capital. Si bien el presente informe se centra en las familias de las personas condenadas a muerte, en modo alguno pretende reducir el reconocimiento del dolor similar que padecen las familias de las víctimas de asesinato, incluyendo el duelo, el trauma y las pérdidas financieras<sup>79</sup>. El tratamiento de las familias de las víctimas de asesinato, por un lado, y de las familias de los condenados a muerte, por el otro, no puede considerarse un juego de suma cero. Se puede y se debe prestar una mayor consideración a ambos grupos.

## 6. Contacto con las familias

82. En su resolución 30/5, el Consejo de Derechos Humanos recordó que las ejecuciones secretas o las llevadas a cabo sin previo aviso, o con un preaviso muy corto, agravaban el sufrimiento de los condenados a la pena de muerte y de otras personas afectadas, y exhortó a los Estados a que velaran por que los niños cuyos padres o cuidadores estuvieran en espera de ser ejecutados, los propios condenados,

<sup>71</sup> Observación general núm. 36 del Comité de Derechos Humanos, párr. 44. El Consejo de Derechos Humanos reiteró lo mismo al año siguiente en [A/HRC/42/28](#), párr. 16.

<sup>72</sup> *Charles Chitat Ng v. Canada* (CCPR/C/49/D/469/1991), párr. 16.4; y [A/HRC/42/28](#).

<sup>73</sup> Tribunal Europeo de Derechos Humanos, *Jabari v. Turkey*, núm. 40035/98, párrs. 33 a 42; y resolución 2003/67 de la Comisión de Derechos Humanos. Véanse también las resoluciones 2004/67 y 2005/59 de la Comisión de Derechos Humanos; [CCPR/C/SDN/CO/5](#), párr. 30; y [CCPR/C/MRT/CO/2](#), párr. 25.

<sup>74</sup> Tribunal Superior de la República Unida de Tanzania, *Republic v. Mbushuu alias Dominic Mnyaroje and Kalai Sangula*, 1994 TZHC 7, 22 de junio de 1994; Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, *Ally Rajabu and others v. United Republic of Tanzania*, núm. 007/2015, párr. 119; y [A/HRC/19/61/Add.3](#), párr. 109.

<sup>75</sup> [A/67/279](#), párr. 40; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, *Roberto Girón y Pedro Castillo Mendoza c. Guatemala*, núm. 76/17, caso 11.686, párrs. 111 a 118.

<sup>76</sup> Death Penalty Information Center, “Botched executions”, disponible en <https://deathpenaltyinfo.org/executions/botched-executions>.

<sup>77</sup> [CAT/C/USA/CO/2](#), párr. 31; [CAT/C/USA/CO/3-5](#), párr. 25; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, *Russell Bucklew c. Estados Unidos*, núm. 71/18, caso 12.958, párr. 78; [A/HRC/45/20](#), párr. 45; y [A/HRC/42/28](#), párr. 15.

<sup>78</sup> National Public Radio, “Gasping for air: autopsies reveal troubling effects of lethal injection”, 21 de septiembre de 2020.

<sup>79</sup> Susan F. Sharp, *Hidden Victims: The Effects of the Death Penalty on Families of the Accused* (New Brunswick, Nueva Jersey, Rutgers University Press, 2005), págs. 10 y 11.

sus familias y sus representantes legales recibieran por adelantado información adecuada acerca de una ejecución pendiente, su fecha, hora y lugar, a fin de permitir una última visita o la comunicación con la persona condenada, la entrega a la familia del cuerpo para su entierro o de información sobre dónde encontrarlo, a menos que ello no redundase en el interés superior del niño<sup>80</sup>.

83. Algunos países han comenzado a reconocer la importancia de prestar atención a las familias de las personas condenadas a muerte. Por ejemplo, el Tribunal Supremo de la India estableció las directrices que debían seguirse antes de la ejecución, entre las que se incluía avisar con suficiente antelación a los condenados a muerte y a sus familiares de la fecha y hora de la ejecución, a fin de que la persona pudiera prepararse mentalmente y reunirse con su familia por última vez<sup>81</sup>. Sin embargo, en otros países, los Gobiernos niegan a las familias su derecho a las visitas familiares; cuando se permiten las visitas familiares, las condiciones de visita prohíben el contacto físico desde el juicio hasta la ejecución; y en algunos países no existen normas que obliguen a informar a las familias y a los representantes legales antes de la ejecución<sup>82</sup>. El secretismo que rodea a la pena de muerte priva a las familias de información sobre la inminente ejecución de su ser querido y, por consiguiente, de cualquier oportunidad de prepararse para ella. El Relator Especial tuvo conocimiento de casos en los que las familias no fueron informadas de la fecha, el lugar o el método de ejecución y, en ocasiones, se enteraron de la ejecución días después de que se produjera, únicamente a través de los medios de comunicación o de las llamadas de otros compañeros detenidos<sup>83</sup>.

## 7. Tratamiento de los cadáveres después de la ejecución

84. Al informar sobre la importancia de tratar y honrar debidamente las fosas comunes, la Sra. Callamard, antigua titular del mandato, describió las fosas como espacios de una pena íntima para aquellos cuyos seres queridos están enterrados en ellas<sup>84</sup>. A pesar de que se ha escrito mucho sobre la imposición de la pena de muerte, apenas se ha prestado atención al tratamiento de los cadáveres de los ejecutados y a las consecuencias que esto conlleva para sus familias.

85. Por lo general, las familias reciben el cadáver de la persona ejecutada. Sin embargo, en algunos países se priva a las familias de la posibilidad de enterrar a sus muertos. Se han denunciado casos en que las autoridades han llevado a cabo el entierro sin informar a la familia y casos en que las autoridades han impuesto condiciones sobre el modo de enterrar los cadáveres o han presionado a las familias para que no celebren un funeral, especialmente cuando han ejecutado a disidentes, activistas o miembros de minorías<sup>85</sup>.

86. El hecho de no poder ver los cadáveres de sus seres queridos después de la ejecución ha llevado a las familias a expresar el temor permanente de que puedan haber sido sometidos a una extracción forzada de órganos<sup>86</sup>.

<sup>80</sup> Véase [A/HRC/48/29](#), párr. 9.

<sup>81</sup> Comunicación de Project 39A, párr. 4.

<sup>82</sup> Comunicación de Texas after Violence Project, párr. 3; comunicación de la European Saudi Organization for Human Rights, párr. 2; comunicación conjunta de Anti-Death Penalty Asia Network, Capital Punishment Justice Project y Eleos Justice, párr. 2; y comunicación de Taiwan Alliance to End the Death Penalty, párr. 15.

<sup>83</sup> Comunicación de la European Saudi Organization for Human Rights, párr. 5.

<sup>84</sup> [A/75/384](#), párr. 3.

<sup>85</sup> Comunicación del Centro Abdorrahman Boroumand de Derechos Humanos del Irán, pág. 5. comunicación de Iran Human Rights, pág. 7; y comunicación de la European Saudi Organization for Human Rights, párr. 7.

<sup>86</sup> Comunicación de The Rights Practice, pág. 6.

## 8. Amenazas, estigmatización y repercusiones económicas

87. La mayoría de las comunicaciones recibidas por el Relator Especial destacaban la falta de apoyo a las familias de los condenados a muerte<sup>87</sup>. En lugar de ese apoyo, detallaban el estigma vinculado al hecho de ser familiar de una persona condenada a muerte, en particular casos en que los hijos de esas personas sufrían discriminación a la hora de buscar empleo<sup>88</sup>. Muchas personas condenadas a muerte proceden de entornos empobrecidos, por lo que su detención, encarcelamiento y ejecución agravan las penurias económicas que padecen sus familias. De hecho, en muchas de las comunicaciones recibidas por el Relator Especial se destacaba que la condena a muerte del sostén familiar volvía a las familias económicamente vulnerables al reducir sus ingresos, empujándolas todavía más al empobrecimiento y el endeudamiento<sup>89</sup>.

## B. Observaciones finales

88. Los Gobiernos que mantienen la pena de muerte deben cumplir con las condiciones cada vez más rigurosas impuestas por las normas internacionales de derechos humanos, que “casi [imposibilitan] la pena de muerte sin violar la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”<sup>90</sup>. Sobre la base de las comunicaciones recibidas y de las investigaciones efectuadas en este ámbito, el Relator Especial llega a la misma conclusión a la que llegó el Sr. Méndez hace diez años: la pena de muerte, tal y como se practica actualmente, equivale a tortura.

89. La pregunta que sigue sin respuesta es si la pena de muerte en sí misma equivale a tortura. Hace diez años, cuando el Sr. Méndez aludió a la aparición de una norma consuetudinaria que prohibía la pena de muerte en cualquier circunstancia, 97 países habían abolido la pena de muerte; en la actualidad, esta cifra ha aumentado hasta los 108 países<sup>91</sup>. El abandono creciente de la pena de muerte es una realidad innegable.

90. Posteriormente, en el suplemento de 2015 de su informe quinquenal sobre la pena capital, el Secretario General concluyó que la pena de muerte no tenía cabida en el siglo XXI, señalando que, a la luz de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia y la práctica de los Estados, la imposición de la pena de muerte era incompatible con los principios fundamentales de los derechos humanos, en particular la dignidad humana, el derecho a la vida y la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes<sup>92</sup>.

91. Desde el punto de vista del derecho internacional, los dos marcos del derecho a la vida y la prohibición de la tortura han contribuido sin duda a restringir el ámbito de aplicación de la pena de muerte<sup>93</sup>. Sin embargo, también han creado un

<sup>87</sup> Comunicación de Taiwan Alliance to End the Death Penalty, párr. 13; comunicación conjunta de CrimeInfo y Eleos Justice, secc. 2; y comunicación de la European Saudi Organization for Human Rights, párr. 2.

<sup>88</sup> Comunicación de Project 39A, pág. 10; comunicación de Ambika Satkunanathan, secc. 3; y comunicación de Taiwan Alliance to End the Death Penalty, párr. 12.

<sup>89</sup> Comunicación de Ambika Satkunanathan, secc. 3; comunicación del Centro Abdorrahman Boroumand de Derechos Humanos del Irán, págs. 2 y 3; comunicación de Project 39A, págs. 7 y 8; comunicación de Odhikar, pág. 3; y comunicación de The Rights Practice, pág. 4.

<sup>90</sup> A/HRC/36/27, párr. 16.

<sup>91</sup> Amnistía Internacional, “Pena de muerte”, disponible en <https://www.amnesty.org/es/what-we-do/death-penalty/>.

<sup>92</sup> A/HRC/30/18, párr. 55.

<sup>93</sup> A/HRC/36/27; A/HRC/10/44; y A/HRC/19/61/Add.4.

contrasentido al equiparar la pena de muerte con la tortura debido a la referencia explícita a la pena de muerte como excepción al derecho a la vida en los tratados<sup>94</sup>.

92. William Schabas describe sucintamente la absurda situación creada por la prohibición absoluta de la tortura, por un lado, y la restricción de la pena de muerte sin llegar a ser una prohibición, por el otro, de la siguiente manera:

Si se conecta a alguien a unos electrodos y se le aplican descargas eléctricas para obtener una confesión, eso equivale a tortura y a una violación del artículo 7 [del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos], a menos que se incremente la corriente lo suficiente como para matarlo, lo cual sería aceptable. Esa es la paradoja a la hora de tratar la pena de muerte<sup>95</sup>.

93. Al margen del análisis doctrinal de los tratados, y al margen del número cada vez más reducido de Estados retencionistas que se aferran a esta sentencia letal como una forma legítima de sanción penal, la idea de que la pena de muerte no constituye tortura simplemente carece de sentido. Por lo tanto, el Relator Especial considera que existe una necesidad urgente e imperiosa de resolver esta inseguridad jurídica y hace un llamamiento a la comunidad internacional para que subsane esta contradicción. Por último, el presente informe también arroja luz sobre el tratamiento de los cadáveres de los ejecutados y las repercusiones que tiene la pena de muerte para sus familias. Los condenados a muerte viven en condiciones deshumanizadoras, seguidas de una muerte dolorosa. Más allá de la ejecución, las familias sufren estigmatización, dificultades económicas y falta de apoyo social. La información sobre el tratamiento de los cadáveres de los ejecutados no solo es importante para garantizar la transparencia en torno al método de ejecución, sino también para la adecuada memorialización de los ejecutados, puesto que el secretismo en este sentido traumatiza todavía más a las familias en duelo. Cuando reconocemos el impacto más amplio de la pena de muerte en las familias, su dolor socava aún más la legitimidad de la pena de muerte.

## VIII. Conclusión

94. La historia de este mandato constituye un ejemplo del papel que pueden desempeñar los titulares de mandatos de procedimientos especiales a la hora de arrojar luz sobre cuestiones prioritarias para la comunidad internacional, tanto a través de su voz particular como de su poder de convocatoria de una diversidad más amplia de expertos técnicos. A lo largo de sus 40 años de existencia, diversos órganos internacionales han elaborado un corpus creciente de orientaciones normativas, y los titulares del mandato han desempeñado una función importante a la hora de inspirar y redactar algunas de ellas, en particular para la prevención e investigación de las muertes ilícitas y para contribuir a su promoción y aplicación efectiva.

95. En esta coyuntura, cabría decir que se trata de un mandato para el cual existe un abrumador consenso normativo sobre las cuestiones de principio y un amplio compromiso público de aplicar esas normas en la legislación nacional. Sin embargo, bajo la superficie, sigue existiendo una brecha de implementación que todavía hace necesaria una acción concertada por parte de la comunidad

<sup>94</sup> William Schabas, “International law and the abolition of the death penalty”, en *Comparative Capital Punishment*, Carol S. Steiker y Jordan M. Steiker, eds. (Cheltenham (Reino Unido) y Northampton (Estados Unidos), Edward Elgar Publishing, 2019).

<sup>95</sup> Facultad de Derecho de la Universidad de Monash y Capital Punishment Justice Project, “Eleos Justice: in conversation with Professor William Schabas”, vídeo, 15 de julio de 2021, disponible en [www.monash.edu/law/events/archive/conversation-series-with-william-schabas](http://www.monash.edu/law/events/archive/conversation-series-with-william-schabas).

internacional, los Estados, la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado con el fin de hacer efectiva la prohibición absoluta y universal de las muertes ilícitas y el deber de proteger el derecho a la vida. Como parte de dicho esfuerzo, debe potenciarse la labor de las investigaciones independientes y la aplicación de medidas preventivas, tanto mediante la adopción de regímenes jurídicos apropiados como mediante la dotación adecuada de recursos.

96. Desde todo el mundo y a diario se sigue poniendo en conocimiento del Relator Especial la cruda realidad de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Este abanico de retos actuales e incipientes, la prevalencia de las muertes ilícitas en todo el mundo y la complejidad de su investigación hacen que el mandato sea tan pertinente hoy en día como cuando fue creado.

## **IX. Recomendaciones**

97. Sobre la base de este repaso cronológico de los 40 años de historia del mandato, el Relator Especial desea formular las siguientes recomendaciones.

### **A. A las organizaciones internacionales**

98. Dada la relevancia de las cuestiones examinadas en el marco del mandato, y la medida en que a menudo pueden repercutir de forma directa en la paz y la seguridad, deben facilitarse más oportunidades de colaboración entre el Relator Especial y el Consejo de Seguridad.

99. Los organismos de las Naciones Unidas deben colaborar con el titular del mandato para ayudar a subsanar la brecha de implementación entre las abundantes orientaciones normativas sobre la investigación y prevención de las muertes ilícitas y las carencias y deficiencias de la práctica a nivel nacional. El ACNUDH y los coordinadores residentes pueden jugar un papel fundamental detectando oportunidades y respaldando iniciativas concretas para esa asistencia técnica a través de su presencia sobre el terreno.

100. Los órganos regionales de derechos humanos deben sopesar la posibilidad de usar en mayor medida los documentos normativos básicos del mandato, y especialmente los adoptados más recientemente, como el Protocolo de Minnesota, en su forma revisada, o las Orientaciones de las Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos sobre el Empleo de Armas Menos Letales en el Mantenimiento del Orden.

### **B. A los Estados Miembros**

101. El titular del mandato está dispuesto a prestar asistencia técnica a los Estados Miembros para que desarrollen su propia capacidad, revisen o creen una legislación nacional que regule el uso de la fuerza por parte de los agentes estatales y creen mecanismos de investigación eficaces y fiables que contribuyan a garantizar la investigación y la prevención efectivas de las muertes ilícitas, en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos y las mejores prácticas forenses. Al formular la resolución por la que se renueva el mandato, los Estados deben valorar la posibilidad de establecer la prestación de dicha asistencia como un método de trabajo básico y ofrecer los recursos adecuados para facilitarla.

102. Los Estados deben actualizar los programas de capacitación de sus agentes con mandato para el uso de la fuerza, con miras a ajustarlos a las normas internacionales.

103. Los Estados deben establecer y facilitar recursos suficientes para los mecanismos independientes de investigación, en particular sistemas de investigación médico-jurídica de las muertes, con el fin de supervisar el uso de la fuerza por parte de los funcionarios del Estado y de llevar a cabo investigaciones eficaces de las muertes potencialmente ilícitas, de conformidad con los Principios relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias y el Protocolo de Minnesota, elaborados con la contribución sustantiva del titular del mandato.

104. Los Estados deben promover y apoyar la cooperación internacional y el intercambio de las mejores prácticas relativas a las investigaciones médico-jurídicas, por ejemplo mediante la cooperación Sur-Sur.

### **C. A las organizaciones de la sociedad civil**

105. El titular del mandato sigue dependiendo de la colaboración activa de la sociedad civil, y por ello el Relator Especial alienta a las organizaciones de la sociedad civil a que sigan colaborando de forma inestimable con el titular del mandato, tanto en cuestiones de interés temático como en casos concretos y situaciones nacionales.

106. En la medida de lo posible, las organizaciones de la sociedad civil deben intensificar su papel de supervisión de la aplicación de las normas y recomendaciones del titular del mandato, a fin de ayudar a identificar, documentar y afrontar las deficiencias en su aplicación efectiva.

### **D. Al mundo académico**

107. Las instituciones de enseñanza superior deben considerar la posibilidad de crear o perfeccionar los programas educativos especializados y la investigación (por ejemplo, mediante alianzas) sobre la labor, las normas y las recomendaciones del titular del mandato, a nivel local, regional e internacional.

108. Las instituciones académicas también deben valorar el potencial de los proyectos destinados a comprender la naturaleza de la brecha de implementación. El titular del mandato está dispuesto a colaborar con tales iniciativas, como ha hecho recientemente de forma pionera con respecto a la revisión de las prácticas médico-jurídicas a nivel mundial que se ha llevado a cabo en la Universidad de Monash.

### **E. Al sector privado**

109. Las empresas deben regirse por las normas elaboradas por el titular del mandato, garantizando al mismo tiempo que se respeten los derechos humanos, incluido el derecho a la vida, y deben valorar la posibilidad de contribuir a las iniciativas de creación de capacidad para la prevención e investigación de las muertes potencialmente ilícitas.



## **F. Sobre la pena de muerte**

110. El Relator Especial insta a los Estados, las organizaciones intergubernamentales, los círculos académicos y las organizaciones no gubernamentales a que contribuyan con investigaciones multidisciplinarias sobre la cuestión de si, en la actualidad, la pena de muerte puede considerarse compatible en sí misma con la prohibición absoluta de la tortura y otras formas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; sobre el llamado “fenómeno del corredor de la muerte”; y sobre las consecuencias adversas generales que puede tener la pena de muerte sobre los derechos humanos de los familiares de los condenados a muerte que esperan su ejecución.

---